

**República de Colombia**  
**Rama Judicial del Poder Público**



**Juzgado Diecinueve Civil Municipal**

Bogotá D.C, veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022).

**Ref. No. 2022-00524.**

**I. OBJETO DE LA DECISIÓN**

Resuelve el Despacho las objeciones formuladas por el acreedor Julio Alfonso Guerrero Bustos a la relación de acreencias efectuada por el Centro de Conciliación de la Asociación Equidad Jurídica, dentro del trámite de insolvencia de persona natural no comerciante de Pedro Hernando Herrera Robayo.

**II. ANTECEDENTES**

**1.** El señor Pedro Hernando Herrera Robayo, promovió solicitud de negociación de deudas de persona natural no comerciante, en la cual relacionaron varias acreencias dentro de ellas, una de tercera clase a favor de Julio Alfonso Guerreros Bustos, por cuenta de un pagaré suscrito por valor de \$100.000.000, y 2 créditos quirografarios a favor de Hugo Eutimio Carrillo Gutiérrez y Alberto Bonilla González, por valor \$160.000.000 y \$60.000.000 respectivamente, cuyo conocimiento correspondió al operador de insolvencia Elkin José López Zuleta del Centro de Conciliación de la Asociación Equidad Jurídica que, en auto de 17 de septiembre de 2020 admitió la petición y en consecuencia, ordenó comunicar a todos los acreedores relacionados por el deudor petionario y la notificación a las agencias judiciales para prevenirlos sobre la actuación.

**2.** En audiencia celebrada el 5 de noviembre de 2020 se puso en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias denunciadas y se actualizaron los montos de capital e intereses, así como la clase de crédito de cada uno de ellos.

Durante dicha audiencia, el acreedor hipotecario Julio Alfonso Guerrero Bustos por conducto de apoderado judicial formuló objeciones.

**3.** Dentro de la oportunidad el citado acreedor, presentó la sustentación de las objeciones, argumentando que el trámite de insolvencia adelantado por el señor Pedro Hernando Herrera Robayo es improcedente, toda vez que, éste ostenta la calidad de comerciante.

Adujo que en las escritura pública No. 808 de 17 de mayo de 2016 otorgada en la Notaría 1ª del Círculo de Zipaquirá, mediante la cual se constituyó hipoteca sobre el bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-56618, anotación No. 011 del 18 mayo de 2016 en el folio de matrícula inmobiliaria, el deudor de forma clara y expresa establece en la cláusula décimo quinto que comparece a suscribir la mentada escritura en su condición de comerciante, así mismo, indicó que cuenta con la matrícula mercantil No. 01357513 de 19 de marzo de 2004 que fue renovada el día 12 de febrero de 2020, y en donde figura como comerciante de conformidad con el certificado expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 19 de octubre de esa anualidad, citando los artículos

artículos 10 y 13 del Código de Comercio que constituyen presunciones de derecho y no admiten prueba en contrario.

Aunado a lo anterior, manifestó que las circunstancias descritas permiten concluir que el convocante al anunciarse como comerciante renunció de manera expresa a tramitar el procedimiento de insolvencia de persona natural.

De otro lado, mencionó que el trámite mediante el cual se le notificó no se surtió en debida forma como quiera que la comunicación no se dirigió a la persona correcta, ni se le remitió copia de la solicitud y del auto admisorio de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 291 del C.G.P. y el Decreto 806 de 2020.

Finalmente, indicó que el centro de conciliación ha incumplido con las facultades y atribuciones en el artículo 537 del estatuto procesal, pues no ha citado en debida forma al deudor y sus acreedores, no ha ilustrado a los sujetos procesales sobre el alcance y objeto del trámite, no ha verificado los presupuestos de insolvencia en la medida que se desconoce el estado de pérdidas y ganancias o los bienes que posee el deudor, no ha solicitado la información necesaria para la adecuación y orientación del procedimiento, la persona designada no ha actuado como conciliador ni se ha identificado como tal en el trámite, no ha motivado a las partes para conciliar, no ha propiciado acuerdos de pago, no ha levantado actas de audiencia ni su registro ante el centro de conciliación, de manera que el procedimiento es totalmente ilegal solicitando decretar la nulidad de todo lo actuado.

**4.** El señor Pedro Hernando Herrera Robayo en su oportunidad, se opuso a la prosperidad de las objeciones planteadas argumentando que carecen de asidero jurídico, son temerarias y no cuentan con ningún respaldo probatorio.

Lo anterior porque, si bien es cierto en el momento en que suscribió la escritura de hipoteca ostentaba la calidad de comerciante de acuerdo con la normatividad legal vigente, a partir de marzo del año 2020 clausuró el establecimiento de comercio en el cual desarrollaba su profesión a raíz del Covid-19 y frente a la indebida notificación, no le asiste razón al apoderado del deudor dado que la misma se adelantó en la dirección que figura en la mencionada escritura pública y fue efectiva, tanto es así que de inmediato el apoderado judicial del acreedor hipotecario presentó el poder ante el centro de conciliación.

### **III. CONSIDERACIONES**

**1.** Dentro del amplio abanico de posibilidades con que el deudor cuenta para honrar sus obligaciones frente a sus acreedores producto de una crisis por el sobreendeudamiento u otros factores, el Legislador creó un nuevo régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes, que tiene como punto de partida el procedimiento de negociación de deudas, luego, la convalidación del acuerdo privado y la liquidación patrimonial.

Dichos procedimientos, se encuentran regulados en los artículos 531 y siguientes del Código General del Proceso, en donde se establecen los requisitos generales y específicos para poder adelantar el trámite inicial y poder dar paso a cada una de las siguientes etapas.

**1.1.** Dentro de los requisitos generales dispuestos en la Ley, en relación a todas las fases de insolvencia, se encuentra los de procedibilidad, que hacen relación a los presupuestos necesarios para acudir al proceso de insolvencia de persona natural no comerciante y que corresponde a:

**(i) -. No tener la calidad de comerciante**, ello en razón a que si se tiene la misma, otro es el procedimiento que debe adelantarse y otro será el juez competente para conocer de la insolvencia.

De manera, que no revisar tal requisito conlleva no sólo a tramitar un asunto por un rito diferente, sino que se desconoce el funcionario a quien le corresponde tramitarlo (Ley 1116 de 2006), con vulneración al debido proceso, pero lo que es más grave, es que tal falta puede conllevar no sólo a la nulidad del trámite inicial, sino a la no apertura de las siguientes fases de insolvencia.

Al respecto, en un caso relacionado, en el que pese a que se llevó a cabo la negociación de deudas, la oficina judicial a quien correspondió la liquidación rechazó la misma, por carecer de competencia, la Corte Suprema de Justicia señaló:

*(...) la resolución que tuvo por comerciante al demandante y, por consiguiente, defirió la incompetencia del despacho municipal, refleja una interpretación respetable de las normas aplicables y una valoración ponderada de las pruebas.*

*Preliminarmente, consignó el juzgador: «(...) la competencia se radica en determinados funcionarios judiciales en consideración a la calidad del sujeto que debe intervenir en la relación procesal, es decir, teniendo en cuenta la connotación especial que se predica respecto de determinado sujeto de derecho; mientras el factor funcional hace referencia a la designación de determinado funcionario para que conozca de un proceso atendiendo la organización jerárquica y división territorial del país (fl. 85, cdno. 2)*

*A continuación señaló que era dable verificar su competencia, dado el reclamo por parte del banco, tarea en la cual identificó que en el «certificado de cancelación de persona natural de Marco Tulio Manosalva Quintero expedido por la Cámara de Comercio de Bucaramanga» aparece que éste tuvo los siguientes establecimientos de comercio: i) uno que llevaba su mismo nombre y que tuvo registrado hasta el 31 de enero de 2013, ii) otro denominado ‘Fosters Café’, que vendió en esa misma fecha, y iii) la ‘Trilladora Cafemar’ que enajenó el 2 de septiembre de 2015; además, consta que el 24 del mismo mes y año canceló su matrícula mercantil, que había registrado el 31 de agosto de 2010 (fls. 86 y 87, idem). Además, resaltó que en la petición de insolvencia fueron relacionados ocho (8) empréstitos con el Banco Agrario otorgados, en su totalidad, entre abril de 2012 y septiembre de 2014.*

*Pasó a destacar que según el Código de Comercio son «comerciantes las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles» (artículo 10), y que cabe presumir esa calidad respecto de quienes figuran en el registro mercantil o tienen abierto un «establecimiento de comercio» (artículo 13).*

*Luego de lo cual, con apoyo en la referida evidencia, concluyó: «son los anteriores actos reflejo de la actividad comercial o mercantil, pues desde el enfoque normativo es claro deducir que Marco Tulio Manosalva Quintero ejerció en varias ocasiones y en distintas modalidades la actividad comercial y bajo dicho ejercicio adquirió las obligaciones dinerarias con entidades bancarias como también con particulares, mientras se encontraba vigente su inscripción mercantil en la Cámara de Comercio de Bucaramanga, [por] lo que es fácil deducir que las acreencias y deudas fueron adquiridas dentro de los postulados del marco normativo comercial en su artículo 10, pues, nótese que se encontraba inscrito con su propia marca (...) como también ejercía el comercio con los establecimientos comerciales Fosters Café y Trilladora Cafemar (...) luego no puede desconocerse que transcurrido un corto término de tiempo desde la fecha de cancelación de la matrícula, se presentó para trámite de insolvencia de persona natural no comerciante y relacionó obligaciones o acreencias adquiridas bajo la condición subjetiva de comerciante» (fl. 88, cdno. 2).*

*Y por consiguiente, definió que «no tiene competencia para conocer de estas diligencias en razón del factor funcional (sic), ya que la competencia tratándose de persona natural COMERCIANTE regulado en la Ley 1116 de 2006 recae en los jueces civiles del circuito del domicilio principal del deudor» (idem).*

5.1. Entonces, la providencia discutida, en los apartes transcritos, expresa una hermenéutica razonable acerca de las normas que regulan la competencia para conocer los juicios de insolvencia, pues por más que haya aludido al factor funcional, arribó a la citada conclusión a partir del carácter de comerciante del quejoso, calificación con la que no incurrió en desfauero, comoquiera que la Corte ha sostenido, a partir de las previsiones del artículo 13 del Código de Comercio, que la figuración de una persona en el registro mercantil, bien sea como profesional del comercio o propietario de un establecimiento dedicado al mismo, conlleva la presunción legal de que desarrolla esa actividad.

En cuanto al tópico, se ha sostenido en casos que comparten algunos matices con éste:

«(...) sobre la base de hallarse demostrada la inscripción del demandante (...) como comerciante, y esta calidad la dio por establecida con la certificación expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá, en la cual consta su matrícula (...) y sobre ese particular, de conformidad con el numeral 1° del artículo 13 del estatuto mercantil, se presume que desde entonces el actor ha ejercido el comercio» (CSJ, SC2068-2016, 22, feb., rad. 2007-00682-01).

Por ende, no puede reprochársele que hubiese entendido que no podía seguir surtiendo el trámite de negociación de deudas que establece el artículo 531 del Código General del Proceso, toda vez que según el artículo 532 del mismo compendio, dichos procedimientos «sólo serán aplicables a las personas naturales no comerciantes». (CSJ, STC5860-2017, 28 de abril de 2017, Rad. 68679-22-14-000-2017-00024-01, M.P Margarita Cabello Blanco).

**(ii). Que la persona no sea controlante de sociedades comerciales o que formen parte de un grupo de empresas.** Esto es, que a pesar de que la persona no sea comerciante, también debe cumplir con el requisito de no ser controlante, ni hacer parte de un grupo de empresas, pues si ello fuera así correspondería adelantar dicho trámite de conformidad con lo dispuesto en las normas de insolvencia empresarial, Ley 1116 de 2006.

En tal sentido señaló en concepto la Superintendencia de Sociedades, que:

De las normas antes descritas es dable colegir según criterio de este Despacho, que “...que los procedimientos allí establecidos se aplican única y exclusivamente a las personas naturales no comerciantes, salvo que las mismas tengan la condición de controlantes de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo empresarial, en cuyo caso están sometidas al régimen de insolvencia consagrado en la Ley 1116 ya mencionada.

En efecto, el artículo 12 op. cit., señala que la solicitud de inicio del proceso de reorganización podrá referirse simultáneamente a varios deudores vinculados entre sí por su carácter de matrices, controlantes o subordinadas, o cuyos capitales estén integrados mayoritariamente por las mismas personas jurídicas o naturales, sea que obren directamente o por conducto de otras personas, o de patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales que no tengan como efecto la personificación jurídica. Para tales efectos, no se requerirá que la situación de control haya sido declarada o inscrita previamente en el registro mercantil. El inicio de los procesos deberá ser solicitado ante la Superintendencia de Sociedades de existir deudores sujetos a su competencia, que tengan un vínculo de subordinación o control, quien será la competente para conocer de los procesos de todos los deudores vinculados, sin perjuicio de la posibilidad de celebrar acuerdos de reorganización independientes.

De la mencionada disposición, se desprende que con ocasión del ejercicio propio del control societario, es posible que la situación de una compañía de una u otra manera afecte a las restantes, en especial cuando se han otorgado garantías o colaterales recíprocos. De esta manera, es probable que la insolvencia de una compañía afecte o arrastre a otras, y por ende, en estos casos todas ellas deben acceder al mecanismo de insolvencia de manera conjunta.

III) Ahora bien, el artículo 2° del Decreto 1749 de 2011 (Por el cual se reglamenta el régimen de insolvencia establecido en la Ley 1116 de 2006, en lo que respecta al Grupo de Empresas y aplica a todos los procesos concursales y a los de reorganización, liquidación y validación de Acuerdos Extrajudiciales de Reorganización en el contexto de un Grupo de Empresas)

define al Grupo de Empresas, como el conjunto integrado de personas naturales, personas jurídicas, patrimonios autónomos, o entes de cualquiera otra naturaleza que intervienen en actividades de carácter económico, vinculados o relacionados entre si por su carácter de matrices, controlantes o subordinadas, o porque la mayor parte de sus capitales pertenece o está bajo la administración de las mismas personas jurídicas o naturales, ya sea porque obran directamente o por conducto de otras personas, o de patrimonios autónomos. Así mismo, se entiende que forman parte de un Grupo de Empresas aquellos vinculados entre si porque son garantes unos de otros y las empresas que se encuentren en los supuestos establecidos en el artículo 32 de la Ley 1116 de 2006. (Oficio 220-050875 del 09 de abril de 2018).

**(iii) Que exista una cesación de pagos:** la norma indica que se entenderá que la persona se encuentra en dicho estado, cuando como deudor o garante incumpla el pago de dos o más obligaciones a favor de dos o más acreedores por más de noventa días, o que contra ésta cursen dos o más procesos ejecutivos o de jurisdicción coactiva, pero en cualquier caso el valor porcentual de las obligaciones deberán representar por lo menos el 50% del pasivo total a su cargo.

Estos requisitos generales son concurrentes, es decir, que deben estar presentes todos y cada uno para poder acudir a la insolvencia de persona natural no comerciante, pues ante la falta de cualquiera de ellos es imposible dar trámite al proceso regulado en el Código General del Proceso y por ende, corresponde al Conciliador o Notario, cuando se da la fase inicial, así como el juez en caso de liquidación, verificar la existencia de éstos y resolver sobre tal punto.

**1.2.** Frente a los presupuestos específicos, responden a cada fase del trámite de insolvencia, para la de negociación de deudas se encuentran establecidos en el artículo 539 *ejusdem*, en relación a la convalidación de acuerdo privado están dispuestos en el artículo 562 y para la liquidación patrimonial en el artículo 563 del estatuto procesal civil.

**2.** Ahora bien, en relación a la competencia para el conocimiento de los trámites de insolvencia, el artículo 533 establece que: “conocerán de los procedimientos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante los centros de conciliación del lugar del domicilio del deudor expresamente autorizados por el Ministerio de Justicia y del derecho, para adelantar este tipo de procedimientos, a través de los conciliadores inscritos en sus listas. Las notarías del lugar de domicilio del deudor, lo harán a través de sus notarios y conciliadores inscritos en las listas conformadas para el efecto de acuerdo con el reglamentos (...)”.

A su vez, el artículo 534 *ejusdem*, indica: “De las controversias previstas en este título conocerá, en única instancia, el juez civil municipal del domicilio del deudor o del domicilio en donde se adelante el procedimiento de negociación de deudas o validación del acuerdo... El juez civil municipal también será competente para conocer del procedimiento de liquidación patrimonial”.

En concordancia, el artículo 552 *ibídem*, dispone: “si no se conciliaren las objeciones en la audiencia, el conciliador la suspenderá por diez (10) días, para que dentro de los cinco (5) primeros días inmediatamente siguientes a la suspensión, los objetantes presenten ante él y por escrito la objeción, junto con las pruebas que pretendan hacer valer. Vencido este término, correrá uno igual para que el deudor o los restantes acreedores se pronuncien por escrito sobre la objeción formulada y aporten las pruebas a que hubiere lugar. Los escritos presentados serán remitidos de manera inmediata por el conciliador al juez, quien resolverá de plano sobre las objeciones planteadas, mediante auto que no admite recursos, y ordenará la devolución de las diligencias al conciliador.

Una vez recibida por el conciliador la decisión del juez, se señalará fecha y hora para la continuación de la audiencia, que se comunicará en la misma forma prevista para la aceptación de la solicitud”.

Normas de las que se desprende, que el conocimiento de los procesos de negociación de deudas y convalidación de acuerdos de la persona natural no comerciante corresponde a los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia o la Notarías del lugar del domicilio del deudor.

Razón por la que, la competencia de los jueces civiles municipales dentro de los trámites antes citados, se restringe a resolver las objeciones que se hayan hecho sobre la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones relacionadas por el deudor o discrepancias de las propias o respecto de otras acreencias (artículo 550 CGP).

**3.** Conforme a las anteriores precisiones, descendiendo al caso objeto de estudio, se advierte que la queja presentada por el apoderado del acreedor hipotecario, acá reclamante, en primer lugar, hace referencia a la calidad de comerciante del deudor, asunto que no corresponde a una objeción de aquellas que deba resolver la jurisdicción civil.

En efecto, se sale de la órbita de competencia de esta funcionaria zanjar la problemática suscitada, pues, en puridad, lo aquí planteado se circunscribe a una controversia que no se sitúa, *per se*, en el terreno de una objeción a un crédito sino a un asunto atañero a uno de los requisitos generales de procedencia del trámite de negociación de deudas, cuyo estudio corresponde al conciliador designado, quien debe hacer un estudio concienzudo para su admisibilidad, sin parar mientes en algunas circunstancias que dejan al descubierto duda acerca de si el actor es o no comerciante.

Así que, se rechazará de plano la objeción planteada por falta de competencia funcional para resolver sobre ella.

**4.** Lo anterior no es óbice para que el operador de insolvencia no vuelva sobre el punto expuesto en esta objeción y analice con detenimiento la situación en torno a la calidad de comerciante del señor Pedro Hernando Herrera Robayo, en especial, valore las manifestaciones efectuadas en la cláusula décimo quinta de la escritura pública No. 808 de 17 de mayo de 2016 otorgada en la Notaría Primera de Zipaquirá mediante la cual se constituyó hipoteca sobre el bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 176-56618 y su inscripción en el registro mercantil, que deben observarse a la luz de lo dispuesto en los artículos 10 y 33 del Código de Comercio, a fin de evitar futuras controversias como las que habilita en igual sentido el Código General del Proceso.

Y es que es plausible jurídicamente verificar si es o no procedente adelantar el trámite de negociación de deudas, esto con la finalidad de que no se vean vulnerados los derechos fundamentales, que a propósito vale la pena traer a colación un pronunciamiento que por vía de tutela amparó estas prerrogativas en un caso análogo por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Civil<sup>1</sup>, y por qué no decirlo, evitar futuras controversias como las que habilita el Código General del Proceso o que las fases posteriores sean rechazadas por falta de los presupuestos generales para iniciar trámites de insolvencia de persona natural no comerciante.

**5.** Ahora bien, respecto de los demás puntos de inconformidad relacionados con las presuntas irregularidades en que incurrió el operador insolvencia frente al cumplimiento de sus deberes legales y las indebida notificación a los acreedores del deudor, igualmente, como se señaló en líneas precedentes al ámbito de acción del Juez Civil Municipal, en esta clase de asuntos se limita a resolver acerca de los

---

<sup>1</sup> Acción de tutela t-11001 31 03 026 2013 00801 01, M.P. Julia María Botero Larrarte, Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Bogotá D.C., Sala Civil.

reparos propuestos frente a la relación de créditos presentada en la audiencia de negociación de deudas de que trata el artículo 550 del estatuto procesal tampoco resulta procedente en esa etapa del proceso analizar dichas discrepancias.

Lo anterior, porque corresponde al Centro de Conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia o la Notaria del lugar del domicilio del deudor, en primer lugar constatar que se cumplan a cabalidad los presupuestos legales para la admisibilidad del trámite de insolvencia y en segundo lugar, realizar el control de legalidad necesario a fin de que el procedimiento allí cursado se adelante en debida forma, máxime cuando en el asunto particular ni siquiera se advierte que el aquí objetante haya puesto en conocimiento del conciliador designado las circunstancias que ahora alega pues de conformidad con el auto No. 3 de 5 de noviembre de 2020 las inconformidades que se sometieron a discusión en la diligencia de negociación de deudas se ciñeron única y exclusivamente a desvirtuar la calidad de persona natural no comerciante del actor y no a la manera en que se ha adelantado el trámite.

**6.** En virtud de lo expuesto, este Despacho rechazará las objeciones por falta de competencia para resolverla, empero exhortará al señor conciliador para que tome nota de lo expuesto en esta considerativa.

#### **IV. DECISIÓN**

En mérito de lo expuesto el **Juzgado Diecinueve (19) Civil Municipal de Bogotá D.C.**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

#### **V. RESUELVE**

**PRIMERO:** RECHAZAR las OBJECIONES remitidas por falta de competencia.

**SEGUNDO:** EXHORTAR al conciliador del Centro de Conciliación de la Asociación Equidad Jurídica, para que tome atenta nota de lo expuesto en esta motiva y adopte las medidas que estime pertinentes.

**TERCERO:** REMITIR por secretaría de INMEDIATO al Centro de Conciliación de la Asociación Equidad Jurídica, las presentes diligencias para lo de su competencia. Déjense las constancias del caso. Oficiese.

**Notifíquese y cúmplase,**<sup>2</sup>

**IRIS MILDRED GUTIÉRREZ  
JUEZ**

---

<sup>2</sup> Esta providencia se notificó por estado No. 80 de 29 de julio de 2022.

**Firmado Por:**  
**Iris Mildred Gutierrez**  
**Juez Municipal**  
**Juzgado Municipal**  
**Civil 019**  
**Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **a45af1e4a63cd7d979cb28b2bf6fbc5e3291785c942404e508dba7225867dea3**

Documento generado en 28/07/2022 09:01:52 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**